

Cesión de datos de dopaje a Francia. Informe 318/2006

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la transmisión a las autoridades deportivas francesas de determinados datos relacionados con las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en relación con el posible consumo de sustancias dopantes por determinados deportistas. En concreto, la consulta se refiere a “la procedencia o no de adoptar por parte de esta entidad medidas de cooperación internacional con Francia encaminadas a la erradicación del dopaje en el deporte consistentes en remitirles la información relativa a posibles infracciones a la disciplina deportiva en esta materia de conformidad con lo expuesto”.

La transmisión así planteada supone una cesión de datos a las citadas autoridades que, dado que las mismas no se encuentran en territorio español, implica asimismo una transferencia internacional de datos a Francia, toda vez que el párrafo segundo de la Norma primera de la Instrucción 1/2000 de esta Agencia Española de Protección de Datos dispone que “toda transmisión de los mismos fuera del territorio español”.

Respecto de las transferencias, el artículo 33.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “No podrán realizarse transferencias temporales ni definitivas de datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para someterlos a dicho tratamiento con destino a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable al que presta la presente Ley, salvo que, además de haberse observado lo dispuesto en ésta, se obtenga autorización previa del Director de la Agencia de Protección de Datos, que sólo podrá otorgarla si se obtienen garantías adecuadas”. No obstante, el apartado k) del artículo 34 de la propia Ley dispone que dicha autorización no será precisa “cuando a transferencia tenga como destino un Estado miembro de la Unión Europea, o un Estado respecto del cual la Comisión de las Comunidades Europeas, en el ejercicio de sus competencias, haya declarado que garantiza un nivel de protección adecuado”.

En consecuencia, en lo que se refiere a la transferencia internacional de datos a Francia, la misma resultaría conforme a la Ley Orgánica 15/1999, sin precisar autorización alguna del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, al ser dicho Estado miembro de la Unión Europea.

Ello no obstante, el párrafo primero de la Norma segunda de la ya citada Instrucción 1/2000 dispone que “La transferencia internacional de datos no excluye de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica

15/1999, conforme a su ámbito de aplicación, correspondiendo a la Agencia Española de Protección de Datos la competencia para verificar su cumplimiento". Ello se funda en la referencia al necesario cumplimiento de la Ley nacional impuesto por el artículo 33.1 de la Ley Orgánica y por el artículo 25.1 de la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Pues bien, la transmisión planteada supone una cesión o comunicación de datos, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como "Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado".

A su vez, dado que la consulta señala que los datos podrían referirse al consumo de determinadas sustancias dopantes, y teniendo en cuenta lo que ya se indicó en el informe de la Agencia Española de Protección de Datos de fecha 25 de octubre de 2005, referido al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, los datos podrían guardar relación con la salud de los deportistas a los que los mismos se refieren.

En este sentido, baste recordar la doctrina reiteradamente manifestada por la Agencia Española de Protección de Datos y reiterada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el sentido de seguir la definición de "dato de salud" establecida en la Memoria Explicativa del Convenio 108 del Consejo de Europa, según la cual tienen este carácter "las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo", pudiendo tratarse de informaciones sobre un individuo de buena salud, enfermo o fallecido, añadiendo dicha Memoria que "debe entenderse que estos datos comprenden igualmente las informaciones relativas al abuso del alcohol o al consumo de drogas". Este concepto amplio de datos de salud ha sido reiterado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades de 6 de noviembre de 2003 (caso Lidqvist).

Respecto de los datos de salud, dispone el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999 que "Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente".

Dado que en este caso no se contará con el consentimiento de los interesados, habida cuenta del modo en que los datos han sido obtenidos, será

preciso que exista una norma con rango de Ley que dé cobertura a la comunicación de los datos. Dicha norma podrá provenir igualmente de lo dispuesto en tratados internacionales ratificados por España e integrantes por tanto de nuestro ordenamiento jurídico.

En materia de lucha contra el dopaje en el deporte resulta de aplicación lo dispuesto en el Convenio nº 135 del Consejo de Europa, de 16 de noviembre de 1989, contra el dopaje, ratificado por España por instrumento de 29 de abril de 1992.

El artículo 8.1 del citado Convenio establece que “La Partes cooperarán estrechamente en los ámbitos a que se refiere el presente Convenio y fomentarán una cooperación análoga entre sus organizaciones deportivas”. Asimismo, el artículo 8.2 c), analizado por esta Agencia en su informe de 25 de octubre de 2005, ya citado, dispone que “Las Partes se comprometen a (...) establecer una cooperación bilateral y multilateral entre sus organismos, autoridades y organizaciones competentes, con el fin de alcanzar, incluso en el plano internacional, los objetivos enunciados en el artículo 4.1”.

En citado artículo 4.1 establece que “Las Partes adoptarán, según los casos, disposiciones legislativas y reglamentarias o medidas administrativas para reducir la disponibilidad (y, en particular, disposiciones encaminadas a controlar la circulación, la tenencia, la importación, la distribución y la venta) así como la utilización en el deporte de agentes de dopaje y de métodos de dopaje prohibidos y, en particular, de esteroides anabolizantes”.

De este modo, en la medida en que la transmisión de los datos a la que se refiere la consulta permitiera el cumplimiento de las finalidades citadas en el artículo 4.1 que acaba de ser objeto de reproducción, entre las que se encuentra “reducir la utilización en el deporte de agentes de dopaje y de métodos de dopaje”, la adopción de medidas de cooperación bilateral para el logro de dicho fin encontraría encaje en lo dispuesto en el artículo 8.2 c) del Convenio 135 del Consejo de Europa, existiendo en consecuencia una norma con rango suficiente que otorgaría, en dicho supuesto, cobertura a la cesión planteada, haciendo la misma posible.